



## Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1999/63/Add.4  
16 de diciembre de 1998

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
55º período de sesiones  
Tema 11 a) del programa provisional

### LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES DE LA TORTURA Y LA DETENCIÓN

#### Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

#### Adición

#### Visita a Rumania

#### INTRODUCCIÓN

1. Una misión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, integrada por el Sr. Kapil Sibal (Presidente) y el Sr. Petr Uhl (miembro), y acompañada por el Sr. Markus Schmidt (Secretario) visitó Rumania del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1998, por invitación del Gobierno de Rumania. La visita se realizó en cumplimiento del párrafo 4 de la resolución 1997/50 de la Comisión de Derechos Humanos en el que se pidió al Grupo de Trabajo que examinara la situación de "los inmigrantes y solicitantes de asilo que sean objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial".

2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno de Rumania por su invitación y por la organización de la visita, que se caracterizó por la plena cooperación de las autoridades, así como la transparencia y la buena voluntad. El Grupo se siente reconocido por la constante disponibilidad del mayor Alexandru Corneliu y el coronel Maximilian Turza durante toda la visita. Con excepción de una reunión prevista con un juez de apelación competente en inmigración, todas las reuniones se llevaron a cabo tal como se habían programado.

#### I. CONSULTAS CON LAS AUTORIDADES

3. El Grupo de Trabajo visitó Bucarest y Giurgiu. En la oficina de Bucarest de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el Grupo mantuvo deliberaciones con representantes de organizaciones no gubernamentales y abogados de solicitantes de asilo. Las conversaciones con las autoridades rumanas incluyeron una reunión con una comisión de cuatro miembros encargada de examinar y aprobar las solicitudes de asilo. El Grupo visitó el Ministerio del Interior y fue recibido por el Director General de la Policía de Frontera, Refugiados, Extranjeros, Migración y Pasaportes, general de brigada Ovidius Paun. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el grupo se reunió con el Director General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos y Consulares, Sr. Cristianu Diaconescu. A las conversaciones celebradas en el Ministerio de Justicia asistió el Sr. Aurel Ciobanu-Dordea, representante de Rumania ante el Consejo de Europa y miembros de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. El Grupo de Trabajo pidió especialmente reunirse con el jefe de la Oficina para los Refugiados del Ministerio del Interior, coronel Vasile Dragoi. No se pudo atender su solicitud de reunirse con un juez competente para decidir las apelaciones de las solicitudes de asilo.

4. Durante sus deliberaciones con los cuatro miembros de la comisión interministerial que decide acerca de las solicitudes relativas al estatuto de refugiado, se hizo evidente que Rumania tiene una capacidad limitada para internar a solicitantes de asilo, es decir, una capacidad limitada en el aeropuerto internacional de Otopeni y un centro en Giurgiu. Se están construyendo nuevos centros en Arad (con fondos del Programa PHARE de la Comunidad Europea) y en Iasi; el nuevo centro del aeropuerto internacional de Otopeni, que tiene lugar para 250 personas, está casi terminado. Una vez que estén terminados, los nuevos centros albergarán entre 500 y 600 personas. (La comisión dice que los solicitantes de asilo son "albergados" y no "detenidos".) En virtud del procedimiento aplicable, uno de los 23 empleados de la Oficina para los Refugiados entrevista al solicitante de asilo y la comisión toma una decisión en un plazo de 30 días. Sólo un pequeño número de solicitantes -alrededor del 2 al 3%- son internados, aunque no por decisión de la comisión sino del oficial de policía competente de la Oficina para los Extranjeros y la Migración. Si se rechaza una solicitud, la comisión prepara una explicación detallada de los motivos del rechazo. En un plazo de diez días, se celebran audiencias en un tribunal, en presencia del solicitante. Es posible interponer una apelación contra la decisión del tribunal, apelación que decide un tribunal de primera instancia de Bucarest en audiencia privada. Los miembros de la comisión no pudieron aclarar si en la segunda instancia se examina el caso en cuanto al fondo o si la segunda instancia equivale a una casación, en la que sólo se examinan los posibles errores de procedimiento (posteriormente el Grupo recibió una explicación clara al respecto en el Ministerio de Justicia). Según los miembros de la comisión, se concede el estatuto de refugiado en más del 50% de los casos que no están comprendidos en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, en particular por motivos humanitarios.

## II. LA CONCESIÓN DE ASILO EN RUMANIA

5. Es preciso exponer algunos datos básicos a fin de que se comprenda el régimen legal aplicable a los solicitantes de asilo. Rumania es un país de tránsito para los solicitantes de asilo. Muchos ciudadanos iraquíes pasan por Rumania para dirigirse a otros lugares de destino. Muchos solicitantes de asilo que tratan de entrar a Rumania utilizan documentos falsificados e identidades falsas; cuando se los aprehende son detenidos, ya que la entrada ilegal al país es un delito. Ocasionalmente, cuando se aprehende en Rumania a solicitantes de asilo que viajan a Europa occidental con falsos pasaportes y visados, éstos solicitan asilo a fin de evitar que se los enjuicie. A partir del momento en que se solicita asilo de conformidad con la ley, interviene el Ministerio del Interior y hasta que se toma una decisión sobre la solicitud de asilo, el solicitante no es enjuiciado. En muchos casos, los solicitantes de asilo no tienen su documentación original. Viajan escondidos en un compartimento de tren o en camiones y tan pronto como llegan a la frontera solicitan asilo. Hasta el momento en que se toma una decisión sobre su solicitud de asilo, se les permite entrar al país o, en determinadas situaciones concretas, son detenidos y enviados a Giurgiu. Rumania no es un país de destino sino un país de tránsito para los solicitantes de asilo.

6. En términos generales hay tres categorías de solicitantes de asilo. Un grupo se compone de los que llegan legalmente a Rumania por el aeropuerto internacional de Otopeni. Aparentemente quieren entrar al país para hacer negocios, pero una vez que son admitidos no tienen la intención de volver a su país de origen y cuando se vence su visado permanecen en el país. A partir de ese momento, su presencia en Rumania es ilegal. Cuando son aprehendidos, se los envía a Otopeni para repatriarlos. Algunos de los que son aprehendidos después de la expiración de sus visados o pasaportes solicitan asilo y, como los procedimientos legales son muy largos, no son deportados. Cabe señalar que, por consideraciones de orden humanitario, Rumania no deporta a las personas a países que se hallan en estado de guerra civil o de conflicto étnico, como Yugoslavia.

7. La segunda categoría, que representa aproximadamente el 90% de los solicitantes de asilo, son las personas que entran a Rumania ilegalmente. Están en contacto con agencias que, por una determinada cantidad, les ayudan a entrar ilegalmente a Rumania. Algunos proceden de Turquía o Bulgaria, pero muchos vienen de Asia meridional (Bangladesh, Sri Lanka, el Pakistán, la India), por Moscú, Ucrania o la República de Moldova. El lugar de destino de muchas de estas personas es Alemania o Escandinavia.

8. La tercera categoría de solicitantes de asilo son los que entran a Rumania como estudiantes. Una vez que han terminado sus estudios, se quedan en el país con su visado de estudiante. En su mayoría proceden de la República Islámica del Irán y del Iraq, así como de Rwanda y la República Democrática del Congo. Algunos de ellos, después de terminar sus estudios, establecen empresas y se hacen comerciantes. En el momento de la visita, se dijo al Grupo que llegaban a Rumania muchos ciudadanos chinos procedentes de distintos lugares.

9. Durante los últimos años, ha habido en total unos 500 a 1.000 solicitantes de asilo por año, cifra que llegó a 1.424 en 1997 y a 758 durante los ocho primeros meses de 1998. La mayoría de ellos -más del 50%- proceden de Bangladesh, el Iraq, Somalia y el Pakistán. Sólo se concede el estatuto de refugiado a un número limitado, a saber, el 12,7% en 1997 y 14,7% durante los ocho primeros meses de 1998. Según otras estadísticas, se concedió el estatuto de refugiado a 38 personas como resultado de 300 apelaciones de las decisiones negativas de la comisión presentadas a un tribunal de primera instancia. Desde 1994, cuando Rumania comenzó a elaborar una nueva Ley de ciudadanía, no se ha concedido la ciudadanía rumana a ninguna persona, ni siquiera las que viven en el país desde hace muchos años. La única excepción son los rumanos repatriados.
10. Según la información suministrada al Grupo por las autoridades, aproximadamente el 90% de los solicitantes de asilo cometen algún tipo de delito.
11. El régimen legal aplicable a los refugiados en Rumania se rige por la Ley de refugiados, adoptada por el Parlamento en marzo de 1996 y promulgada el 2 de abril de 1996 (Ley Nº 15/1996). Entró en vigor el 5 de mayo de 1996. A continuación se describen algunas características importantes de esa ley.
12. En virtud de las disposiciones del artículo 1, se concede el estatuto de refugiado, a solicitud suya, al extranjero que prueba que tiene fundados temores de ser perseguido en su país de origen por motivos de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Por "país de origen" se entiende, en el caso de una persona con varias nacionalidades, cada país del que la persona es ciudadana y, en el caso de un apátrida, el país donde tiene su domicilio. El extranjero que obtiene el estatuto de refugiado en Rumania tiene que cumplir la legislación rumana y las convenciones internacionales relacionadas con el estatuto de los refugiados en que Rumania es Parte.
13. Sin embargo, cabe destacar que también se puede conceder el estatuto de refugiado por razones humanitarias a un extranjero que no reúne las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 1, caso que está previsto en el artículo 2.
14. El procedimiento para conceder el estatuto de refugiado se explica en el capítulo II de la Ley Nº 15/1996, en cuyos artículos 6 a 14 se describe un procedimiento detallado, por el cual el extranjero que solicita el estatuto de refugiado debe presentar por escrito una solicitud fundamentada a las autoridades competentes; cuando se presenta esa solicitud a una unidad de la policía de frontera, se permite la entrada del extranjero al país. Después de recibir la solicitud, la Dirección General de la Policía de Frontera, Extranjeros, Migración y Pasaportes del Ministerio del Interior o una de sus unidades territoriales tiene que examinar la documentación y proporcionar a la persona un certificado que servirá de documento temporal de identidad en Rumania. Si el solicitante no tiene los medios materiales necesarios, las autoridades determinarán su lugar de residencia y pueden proporcionarle un documento que le permita viajar gratis.

15. En virtud del artículo 9 de la Ley N° 15/1996, una comisión nombrada por el Gobierno e integrada por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Protección Social, que en su conjunto constituyen el Comité Rumano de Cuestiones de Migración, está habilitada para examinar la solicitud y adoptar una decisión en primera instancia. Cada vez que se presenta una solicitud a un órgano del Estado para que se conceda el estatuto de refugiado, dicha solicitud se presenta a la comisión en un plazo de diez días; la comisión está obligada a tomar una decisión sobre la solicitud que en un plazo de 30 días a contar de la fecha de recepción.

16. El artículo 10 impone a la persona que solicita el estatuto de refugiado ciertas obligaciones, que son las siguientes:

- a) presentar por escrito una solicitud fundamentada con los datos indicados por el órgano al que se ha de presentar la solicitud;
- b) entregar el documento utilizado para cruzar la frontera y recibir el documento estipulado en el párrafo 1 del artículo 8;
- c) responder a los órganos competentes y suministrarles información completa y fidedigna sobre la propia persona y su solicitud;
- d) no abandonar el lugar de residencia sin autorización del órgano al que se ha presentado la solicitud o de la comisión mencionada en el artículo 9;
- e) presentarse a los exámenes médicos que se le fijen;
- f) comportarse de manera correcta y civilizada y obedecer las leyes del Estado rumano y las medidas establecidas por los órganos rumanos competentes para los asuntos relativos a los refugiados.

17. Sin embargo, en virtud del artículo 11 la comisión está habilitada para rechazar la solicitud del estatuto de refugiado por los siguientes motivos:

- a) si la persona no reúne las condiciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 1;
- b) si la persona se encuentra en una de las situaciones previstas en el artículo 4 (véanse los párrafos 33 y 34 infra);
- c) si la persona, con mala intención, no proporciona todos los datos y la información que necesitan los órganos competentes de Rumania para tramitar la solicitud;
- d) si la persona trata de obtener el estatuto de refugiado presentando datos o información erróneos;
- e) si la persona no cumple una de las obligaciones estipuladas en el artículo 10;

- f) si a la persona ya se le ha concedido el estatuto de refugiado en otro país contra el cual no puede invocar la aplicación del párrafo 1 del artículo 1.

18. La decisión de aceptar o rechazar la solicitud del estatuto de refugiado se comunica al solicitante por escrito y puede ser impugnada mediante la presentación de un recurso en un plazo de diez días a contar de la fecha de la comunicación (art. 13). La apelación se juzga en virtud de un procedimiento de emergencia en un tribunal de primera instancia situado dentro de cierto radio de la sede de la comisión o en el tribunal de primera instancia del lugar de residencia del solicitante. La apelación es juzgada por dos abogados con la participación del fiscal. Sin embargo, si se falla en contra del solicitante, se le aplican las disposiciones de la Ley de extranjería (Ley N° 25/1969). A partir de entonces se podrá disponer dónde estará su "residencia", lo que equivale a una detención de facto. Esos solicitantes pueden ser enviados a centros de detención como Giurgiu, desde donde serán repatriados a su país de origen o enviados a un lugar de destino apropiado. El solicitante de asilo o el fiscal pueden apelar de la decisión del tribunal ante un tribunal nacional en un plazo de cinco días.

19. En virtud del artículo 15 se reconocen a la persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado los siguientes derechos:

- a) Permanecer en el territorio de Rumania y obtener los documentos necesarios para probar su identidad y para cruzar la frontera.
- b) Elegir su lugar de residencia y circular libremente, en las condiciones previstas por la Ley de extranjería.
- c) Ser empleado por personas físicas o jurídicas, ejercer cualquiera de las profesiones liberales, realizar negocios y otros actos jurídicos, según lo previsto por la ley.
- d) Ser remunerado y beneficiarse de otros derechos materiales derivados de las actividades emprendidas, así como de la seguridad social, según lo previsto por la ley.
- e) Cursar estudios primarios en las condiciones previstas por la ley para los ciudadanos rumanos u otros niveles de enseñanza en las condiciones previstas para los extranjeros.
- f) Beneficiarse de un trato igual al que se concede a los ciudadanos rumanos en lo que respecta a la libertad para practicar su religión e impartir educación religiosa a sus hijos.
- g) Tener libre acceso a la asistencia judicial y administrativa.

- h) No ser expulsado o devuelto, excepto por razones de seguridad nacional u orden público; cuando se adoptan tales medidas, la persona interesada no puede ser enviada a un territorio donde su vida o su libertad estén en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
- i) Recibir, a solicitud suya y dentro de las posibilidades financieras del Estado, ayuda reembolsable, cuyo nivel corresponde al sueldo mínimo por un período de seis meses, si por razones objetivas la persona carece de los medios de subsistencia necesarios. De haber razones bien fundamentadas, esa ayuda puede prorrogarse por hasta tres meses más.

20. En virtud del artículo 18, se puede revocar el estatuto de refugiado del solicitante:

- a) si se le ha concedido sobre la base de declaraciones falsas del interesado o que éste haya obtenido en forma fraudulenta;
- b) si después de obtener el estatuto de refugiado, el extranjero ha cometido uno de los actos estipulados en el artículo 4 o si se descubre que ha cometido un acto de esa índole antes de la decisión final por la que se le concedió el estatuto de refugiado.

21. Lo que antecede supone que si la persona que ha obtenido el estatuto de refugiado comete un delito penado por ley en Rumania, se puede revocar su estatuto de refugiado y se lo puede deportar. En virtud del artículo 21, una vez que se retira o cancela el estatuto de refugiado, la persona puede ser deportada o enviada a su país de origen o a cualquier otro país. Cabe señalar aquí que Rumania ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. El derecho de asilo está consagrado en el párrafo 2 del artículo 18 de la Constitución de Rumania, en virtud del cual "se puede conceder o revocar el derecho de asilo, con arreglo a las disposiciones de la ley, en cumplimiento de los tratados y pactos internacionales en que Rumania es Parte".

22. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 11 de la Constitución de Rumania, los tratados ratificados por el Parlamento forman parte del derecho nacional. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 20, las reglamentaciones internacionales tiene precedencia con respecto a las leyes internas, en caso de que haya incongruencias entre las leyes internas y los pactos y tratados relacionados con los derechos humanos fundamentales en que Rumania es Parte. El párrafo 3 del artículo 19 de la Constitución de Rumania garantiza que "la expulsión y la extradición serán decididas por un tribunal".

23. Pese a esta protección constitucional contra la expulsión, aún se halla en vigor la Ley de extranjería de 1969 que, entre otras cosas, confiere autoridad al Ministerio del Interior para dictar una orden de expulsión contra un extranjero.

### III. DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

24. El Grupo de Trabajo visitó los locales del centro de detención de solicitantes de asilo del aeropuerto internacional de Otopeni en Bucarest, los locales del aeropuerto de Baneasa, también en Bucarest, las viviendas para refugiados y solicitantes de asilo de la calle Gociu N° 26, en Bucarest, y un albergue para ciudadanos extranjeros en situación irregular, en Giurgiu. El Grupo pudo entrevistar a todas las personas alojadas en Gociu y a las que estaban internadas en Giurgiu sin que se hallaran presentes las autoridades.

25. En el momento en que el Grupo realizó su visita, tres personas se hallaban internadas en celdas en el aeropuerto internacional de Otopeni, a saber, dos ciudadanos pakistaníes y un iraquí. Al parecer podían salir del lugar donde se hallaban las celdas para ir a la zona de tránsito, pero no más lejos. En la zona de tránsito, el Grupo vio a unos 50 ciudadanos chinos que no habían solicitado asilo pero que habían tratado de entrar en Rumania como hombres de negocios. Sin embargo, las autoridades rumanas les denegaron la entrada por estimar que no eran hombres de negocios (los ciudadanos chinos que llegan a Rumania como hombres de negocios no necesitan visados rumanos). Los ciudadanos chinos iban a ser devueltos, ese mismo día o el día siguiente, por avión a Moscú. Según la información proporcionada al Grupo por la policía, unos 6.500 ciudadanos chinos habían tratado de entrar en Rumania como hombres de negocios durante los nueve primeros meses de 1998.

26. En general los extranjeros son deportados por avión. Ante el riesgo inminente de ser deportados en virtud de un fallo judicial muchos extranjeros presentan una solicitud para obtener el estatuto de refugiado en el aeropuerto, inmediatamente antes de la expulsión. Mientras se tramita su solicitud, son "alojados" en el aeropuerto, a veces durante varios meses. En el momento en que el Grupo realizó su visita, no había ninguna persona internada en el aeropuerto de Baneasa.

27. El centro de detención de Giurgiu es una casa con una cerca de madera y un patio en el que hay tres baños que están en muy mal estado. El techo de la casa tiene goteras y las personas internadas en Giurgiu se quejaron de que cuando llovía todo quedaba empapado. No hay muebles en las habitaciones y las personas duermen de a dos o tres sobre colchones delgados. La pequeña cocina está sucia y la poca agua que hay no es potable. Si bien las condiciones físicas de detención como tales no corresponden al mandato del Grupo de Trabajo, en Giurgiu eran tan degradantes que el Grupo presentó una protesta en las deliberaciones que mantuvo en los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia.

28. En el momento en que el Grupo realizó su visita, se hallaban detenidas en Giurgiu 61 personas, la mayor parte de ellas porque sus pasaportes eran falsos o habían expirado. La mayoría de ellos habían quedado detenidos en Giurgiu entre una semana y dos meses; cuatro se hallaban allí desde hacía más de seis meses y, según la información proporcionada al Grupo, ninguna había permanecido allí más de ocho meses.



29. Si bien las autoridades no indicaron al Grupo el número total de solicitantes de asilo detenidos en Rumania, es evidente que en la actualidad no hay ningún local aparte del Giurgiu donde se interne a los solicitantes de asilo. Algunas de las personas entrevistadas por el Grupo en Giurgiu habían estado detenidas antes en cárceles en otras partes del país después de haber solicitado asilo para impedir que se los enjuiciara por haber cruzado la frontera en forma ilegal.

#### IV. MOTIVOS DE INQUIETUD RELACIONADOS CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA A LOS REFUGIADOS

30. La aplicación de la Ley relativa a los refugiados crea las siguientes anomalías:

- a) Muchos solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales son migrantes económicos, son aprehendidos cuando tratan de cruzar ilegalmente la frontera. Es posible que en ese momento pidan oralmente que se les conceda asilo, pero esa solicitud no se tiene en cuenta porque la Ley relativa a los refugiados dispone que se debe presentar por escrito una solicitud fundamentada para solicitar asilo en un plazo de diez días después de cruzar la frontera. Muchos inmigrantes ilegales no conocen bien la ley y sus procedimientos ni se hallan familiarizados con el idioma o el entorno de ese país extranjero. Habiendo tratado de cruzar ilegalmente la frontera, con lo cual han cometido un delito, naturalmente se los interna y se les aplican las leyes penales aunque hayan pedido asilo oralmente.
- b) Las personas cuyas solicitudes se hallan pendientes o a las que se ha concedido asilo se hallan sujetas al estricto régimen jurídico de la Ley N° 15/1996, ya que su solicitud del estatuto de refugiado se desestima o se cancela su estatuto de refugiado en caso de que hayan violado, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley N° 15/1996. En ese caso, se los somete al régimen aplicable a los extranjeros. Como su estatuto de refugiado puede ser revocado o su solicitud puede ser rechazada si se considera que los criterios invocados no están fundamentados o son vagos, siempre corren el riesgo de que se les aplique la Ley de extranjería (N° 25/1969) que no prevé ningún recurso real. Ni siquiera se puede aplicar o invocar el recurso de hábeas corpus. Por lo tanto, se hallan constantemente bajo la amenaza o el riesgo de ser detenidos arbitrariamente;
- c) Para las personas a las que se aplica la Ley N° 25/1969, no hay ningún recurso judicial que permita determinar la legalidad de su deportación. Aun cuando la Constitución de Rumania estipula (véase el párrafo 3) del artículo 19) que una persona no puede ser expulsada o extraditada salvo en virtud de un fallo judicial, la expulsión o deportación de una persona considerada extranjera con arreglo a esa ley no se efectúa en cumplimiento de un procedimiento judicial por el que se ordene la deportación de la persona de que se trata.

31. En virtud del artículo 22 de la Ley N° 15/1996 se limita la duración del estatuto de refugiado a tres años, con la posibilidad de conceder una prórroga de hasta un máximo de dos años si el refugiado prueba una vez más que sigue reuniendo los criterios estipulados en la Ley N° 15/1996.

32. Es motivo de preocupación que en la Ley relativa a los refugiados, el derecho a la protección contra la devolución se aplica sólo a los refugiados reconocidos. Ninguna disposición de la ley se refiere expresamente a la protección contra la devolución en el caso de los solicitantes de asilo.

33. El artículo 4 de la Ley N° 15/1996, en el que se estipulan los motivos para excluir del estatuto de refugiado a determinadas categorías de personas, es mucho más fuerte que las cláusulas de exclusión de los artículos 1 D, E y F de la Convención de 1951. Por ejemplo, en el caso de delitos graves no políticos, mientras que la Convención de 1951 excluye del estatuto de refugiado sólo a las personas que han cometido tales delitos fuera del país de refugio antes de ser admitidas en ese país, la ley de Rumania también excluye del estatuto de refugiado (en virtud del apartado b) del artículo 4) a las personas que han cometido cualquier tipo de delito en el territorio de Rumania "por el cual la ley dispone un castigo de más de tres años de cárcel". Ese delito puede consistir, por ejemplo, en el cruce ilegal de la frontera de Rumania, que se castiga con penas de prisión variables que van desde tres meses hasta siete años en virtud de la Ley de fronteras (Ley N° 56/1992). También quedan excluidas del estatuto de refugiados en virtud del apartado c) del artículo 4 de la Ley N° 15/1996 las personas que han "cometido actos que son contrarios a... los tratados y convenciones internacionales relativos a los refugiados en que Rumania es Parte".

34. Además de las cláusulas de exclusión contenidas en el artículo 4 de la Ley N° 15/1996, el artículo 10 impone a los solicitantes del estatuto de refugiado una serie de obligaciones, que se enumeran en el párrafo 16 supra y que, de no cumplirse, darían lugar al rechazo automático de la solicitud en virtud del apartado e) del artículo 11 de la ley. En virtud de la Ley N° 15/1996 se considera que abandonar el lugar de residencia sin autorización es motivo suficiente para rechazar automáticamente la solicitud de asilo, dando lugar a la detención inmediata y a la aplicación de la Ley de extranjería.

35. Con arreglo al artículo 6 de la Ley N° 15/1996, los solicitantes de asilo deben pedir el estatuto de refugiado en un plazo de diez días después de su llegada a Rumania. El artículo 6 prohíbe automáticamente el acceso al territorio rumano de los solicitantes de asilo indocumentados que no "lleguen directamente" de un país en el que su vida o su libertad se halla amenazada por cualquiera de los motivos contenidos en el artículo 1 de la ley. Por ello, la ley confiere autoridad a los guardias o policías de frontera, que no tienen forzosamente información actualizada acerca de la situación en los países de origen de los solicitantes de asilo, para determinar las pruebas y las cuestiones relativas a la credibilidad de las solicitudes de asilo de las personas sin documentos o visados válidos que solicitan ser admitidas en el territorio de Rumania. El artículo 6 de la Ley N° 15/1996 también parece incorporar a la legislación el concepto de "tercer país seguro" sin definirlo

expresamente o dar una indicación en cuanto al alcance de su aplicación. Las disposiciones relativas a la aplicación de la ley, que fueron emitidas por el Gobierno el 13 de noviembre de 1996 como Decisión gubernamental N° 1182, interpretan que la "llegada directa" incluye situaciones en que el solicitante de asilo "atraviesa en tránsito terceros países que no son firmantes de las convenciones internacionales relativas al estatuto de los refugiados" o cuando la persona "no puede solicitar el estatuto de refugiado en los territorios de los países que ha atravesado por razones que no son responsabilidad suya". En lo que se refiere a su aplicación en la práctica, la disposición sobre "llegada directa" del artículo 6 no se ha limitado a la cuestión de la admisión de solicitantes de asilo indocumentados como dispone la ley, sino que también ha recurrido a esa disposición la comisión interministerial para la determinación del estatuto de refugiado en primera instancia. En diversos casos, la comisión ha utilizado esa disposición como "prueba de credibilidad" y ha sostenido en efecto que no se podía determinar si existía un fundado temor de persecución cuando el solicitante ha pasado por un tercer Estado que es firmante de la Convención de 1951. De ser rechazado, no se devuelve al solicitante al presunto "tercer país seguro" por el que ha pasado para que las autoridades de ese país puedan examinar la solicitud de asilo del interesado, sino que puede ser expulsado a su país de origen una vez que se ha agotado el procedimiento de apelación.

36. Los solicitantes de asilo que se hallan privados de libertad en la zona de tránsito del aeropuerto internacional de Otopeni no se benefician de las garantías constitucionales de que "cualquier persona detenida... será informada prontamente, en un idioma que entienda, de los motivos de su detención... y la notificación de los cargos que se formulan contra ella se hará sólo en presencia de un abogado". Tampoco se les informa acerca de las medidas prácticas que deben adoptar para solicitar el estatuto de refugiado en Rumania si tienen un fundado temor de ser perseguidos si regresan a su país de origen. Esto se debe sobre todo al hecho de que las autoridades rumanas no consideran que esta categoría de solicitantes de asilo han "entrado" en Rumania y se hallan sujetos a la jurisdicción rumana.

#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

37. El Grupo de Trabajo considera que los inmigrantes ilegales que no hayan presentado por escrito una solicitud fundamentada de asilo deben recibir el mismo trato que los que solicitan asilo formalmente tal como prevé la ley. De lo contrario, esos inmigrantes ilegales se hallan sujetos a detención y a deportación o expulsión de Rumania sin ninguna salvaguardia legal y sin que un tribunal haya fallado acerca de su expulsión, por lo cual su detención y posterior expulsión son arbitrarias.

38. Se pide al Gobierno de Rumania que vele por que el delito de cruzar la frontera, al que se impone una pena de tres o más años de prisión, no constituya la base del rechazo de la solicitud de asilo, que provoca automáticamente la expulsión y deportación sin la intervención de un tribunal, con lo cual el funcionamiento del régimen legal es excesivamente

estricto y no se ajusta al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

39. Se debe sensibilizar debidamente al personal de la policía de frontera acerca de los problemas que plantea la afluencia de inmigrantes ilegales a Rumania de modo que esos inmigrantes no sean detenidos y enjuiciados antes de que puedan expresar sus intenciones y hacerlas comprender. Una expresión oral de la intención de solicitar asilo debe tener el mismo valor que una solicitud fundamentada presentada por escrito; de lo contrario, el solicitante de asilo puede verse detenido arbitrariamente por motivos técnicos.

40. La situación que se plantea en virtud de los criterios enumerados en los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15/1996, de conformidad con los cuales se puede revocar el estatuto de refugiado de una persona, lo que resulta en su detención y expulsión de Rumania, expone a cada refugiado a graves riesgos de detención arbitraria. El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que elimine de la ley los criterios como los que figuran en los artículos mencionados, ya que dan amplias facultades a las autoridades.

41. La situación que plantea el carácter limitado del estatuto de refugiado que se concede a los solicitantes en virtud del artículo 22 de la Ley N° 15/1996 se debe corregir, ya que no es conforme al párrafo 1 del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

42. La protección contra la devolución debe ser aplicable a todos los solicitantes de asilo y no sólo a los solicitantes reconocidos.

43. Las cláusulas de exclusión de la Ley N° 15/1996 se deben armonizar con las cláusulas de exclusión del artículo 1 D, E y F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

44. El Grupo de Trabajo estima que las facultades otorgadas por el artículo 18 de la Ley N° 25/1969 (Ley de extranjería) para determinar el lugar de residencia de las personas a las que se aplicarán las disposiciones de esa ley equivale exactamente a la facultad de detención, ex facie arbitraria, ya que la ley no requiere que se dé a la persona explicación alguna en el momento de la detención. Esa ley ni siquiera da derecho a la persona a interponer un recurso legal en caso de que se ejerza esa facultad. Las consideraciones relativas al orden público o la seguridad del Estado que se invocan en el caso de los solicitantes de asilo o las personas cuyo estatuto de refugiado puede revocarse porque la solicitud de asilo se basó en criterios vagos o imprecisos, hace que dichas disposiciones no sean conformes al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe formular la misma crítica con respecto a una disposición análoga del artículo 8 de la Ley N° 15/1996, aunque se dijo al Grupo que la policía no aplicaba esta disposición en el caso de los solicitantes de asilo.

45. El Grupo de Trabajo recomienda que se corrija esa situación previendo salvaguardias legales adecuadas, de conformidad con las normas internacionales para la protección de la persona y creando recursos judiciales adecuados.
46. En la Ley N° 25/1969 se deben prever salvaguardias y recursos legales adecuados para todos los extranjeros que se enfrentan con la posibilidad de ser expulsados o extraditados, tal como se ha previsto en los instrumentos jurídicos internacionales (por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
47. La Ley N° 25/1969 debe armonizarse con el párrafo 3 del artículo 19 de la Constitución de Rumania que prohíbe la expulsión y la extradición sin un fallo de un tribunal.
48. Se debe proporcionar a todos los solicitantes de asilo sujetos a la privación de libertad una protección constitucional, se los debe informar prontamente de los motivos de su detención y proporcionarles los recursos legales existentes para obtener su liberación.
49. En el momento de su detención, se debe explicar a los detenidos los motivos de esa medida en un idioma que comprendan.
50. Se debe dar a los detenidos, en el momento de su detención, una explicación por escrito de sus derechos y de la forma de ejercerlos.
51. Se debe examinar cada decisión de detener a una persona para determinar la necesidad de esa medida y su conformidad con las normas internacionales, mediante una audiencia oral pronta en un tribunal u otra modalidad de examen independiente e imparcial, proporcionando al interesado asistencia letrada. En caso de que se autorice mantener la detención, los detenidos deben tener la posibilidad de impugnar nuevamente los motivos de su detención.
52. Se debe dar a los detenidos el debido acceso a sus representantes legales, sus parientes y los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
53. Se debe permitir el acceso de las organizaciones no gubernamentales especializadas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los representantes legales de los detenidos a todos los lugares de detención, incluidas las zonas de tránsito en los puertos y aeropuertos internacionales.
54. Se debe dar a todo el personal una formación apropiada en relación con la situación especial y las necesidades de los solicitantes de asilo detenidos.

-----